

# Reporte anual de escuelas seguras

Enero a diciembre del 2024

Este documento no es un análisis exhaustivo de todos los ataques contra la educación en Colombia. Los datos e información de este reporte solo hacen referencia a los 14 departamentos donde la organización tiene presencia en el país y sus categorías de análisis solo están relacionadas con la [Declaración de Escuelas Seguras](#).

De acuerdo con la información recolectada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), los ataques contra instituciones educativas, sus estudiantes y personal en Colombia se incrementaron en comparación con los reportes de la organización en el 2023. Entre enero y diciembre de 2024, al menos 24.003 personas fueron afectadas por algún tipo de evento que puso en peligro su vida e integridad en las escuelas o en los caminos que conducen a ellas.

Del total de las personas afectadas, 22.720 fueron niños, niñas y adolescentes, 1.108 docentes y 175 personas que hacen parte del personal educativo. 95 de cada 100 personas afectadas fueron estudiantes. Desde 2022, la organización evidencia un incremento en el número de población afectada, reflejando una tendencia preocupante, lo que subraya la necesidad de acelerar la implementación del [plan de acción nacional sobre escuelas seguras](#) del Gobierno colombiano.

Durante el 2024, NRC registró 120<sup>1</sup> eventos que afectaron la educación en 14 departamentos, lo que representa un incremento del 27 por ciento en el número de eventos reportados en el mismo periodo de 2023 por la organización. Del total de eventos, el 56 por ciento ocurrieron en camino a la escuela y el 44 por ciento ocurrieron en la escuela<sup>2</sup>.

“Las consecuencias del control de los actores armados y la ausencia estatal en este territorio están teniendo un impacto profundo en la educación.” – Docente, Cauca.

Como consecuencia de la disputa territorial entre grupos armados, el departamento del Cauca concentró el 28 por ciento del total de los eventos registrados por NRC durante el 2024, con un aumento del 135 por ciento en comparación con el año anterior. Las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas han sido las principales víctimas de estos ataques contra la educación.

Por otra parte, en el departamento de Arauca, nororiente del país, el número de eventos reportados aumentó en un 111 por ciento, concentrando el 16 por ciento del total de los eventos registrados por NRC. En este departamento, se reportaron ataques a la educación en cuatro de sus siete municipios. Esta situación en el departamento afecta principalmente a comunidades campesinas e indígenas.

La mayoría de los ataques contra la educación estuvieron relacionados con ataques directos a las escuelas y el uso de Minas Antipersonal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE). En los 120 eventos identificados se reportaron 242<sup>3</sup> ataques contra la educación: 54 ataques directos a las escuelas, 50 relacionados con la utilización de MAP-MSE, 48 usos u ocupaciones militares de escuelas, 42 ataques a estudiantes, 30 ataques contra docentes y 18 ataques a otro personal educativo.

Los enfrentamientos entre grupos armados cerca de las escuelas o en los caminos que conducen hacia ellas representan un grave peligro para la comunidad educativa. El 67 por ciento de los ataques directos contra las escuelas fueron provocados por enfrentamientos armados, lo que resultó en la suspensión de

<sup>1</sup> Los eventos de ataques a la educación pueden incluir una o más afectaciones.

<sup>2</sup> La categoría “en el camino a la escuela” agrupa eventos que se presentaron en el camino del hogar hacia la escuela y de la escuela hacia el hogar.

<sup>3</sup> Es posible que en los eventos reportados se registren 2 o más ataques contra la educación y/o una o más sedes educativas que se encuentran en la misma área geográfica.

clases. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas de protección para las escuelas y garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa.

"Estábamos en la escuela cuando iniciaron los enfrentamientos. Cuando todo terminó vimos que la escuela y el material pedagógico tenía impactos de bala." – Docente, Antioquia.

El aumento en la presencia y uso de artefactos explosivos en Colombia, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja<sup>4</sup>, ha expuesto a comunidades enteras, especialmente en zonas rurales, a un riesgo inminente. La presencia de estos artefactos en las cercanías de las escuelas representa una amenaza directa para la educación, generando un clima de miedo y desconfianza que impide el acceso a la escuela de manera segura.

Además, la presencia de grupos armados alrededor y dentro de las escuelas persiste. Las instituciones continúan siendo utilizadas como bases de operaciones y escenario de intrusiones armadas, incluso sus salones de clase. En el 2024, fueron afectados por esta situación 73 centros educativos. Esto representa un 20 por ciento de aumento en el número de centros educativos que han sido afectados por ataques contra la educación.

"Los actores armados están usando nuestros salones de clase y hasta el comedor como si fueran de ellos. Los niños tienen miedo de venir a estudiar y los profesores estamos preocupados por nuestra seguridad" – Docente, Arauca.

Aunque los datos de ataques directos contra estudiantes y docentes son menores en comparación con otras categorías de ataques a la educación, es importante mencionar que estas afectaciones también se han incrementado desde el 2022. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo publicó cifras que dan cuenta del aumento del reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales y con presencia de grupos armados. Esta situación ha generado un clima de inseguridad que afecta el derecho a la educación. Además, el subregistro de esta información, principalmente como consecuencia del temor a denunciar estos hechos por la presencia y represalias de grupos armados, impiden conocer la verdadera magnitud del problema.

"Los actores armados caminan por los alrededores de la escuela como si nada, se acercan a hablar con los estudiantes y les ofrecen refrigerio o pagan las cuentas en la tienda escolar." Docente – Valle del Cauca.

Los ataques contra la educación provocaron la suspensión de clases en el 72 por ciento de los casos reportados en 2024. La duración promedio de estas interrupciones fue de una semana, pero en el 28 por ciento de los casos se prolongó entre dos y tres semanas, afectando la continuidad educativa de los estudiantes.

A pesar del aumento en el número de casos de los ataques contra la educación que se reportan, la respuesta ha sido insuficiente. Solo el 31 por ciento de los casos reportados recibieron una atención oportuna y en el 96 por ciento de los casos se sigue requiriendo algún tipo de asistencia, especialmente relacionada como salud mental, ayuda humanitaria, desminado humanitario, suministro de kits educativos y reconstrucción de las escuelas. Lamentablemente la falta de una respuesta a tiempo y efectiva de las instituciones de Gobierno y de la cooperación internacional limita la posibilidad de disminuir el número de ataques contra la educación.

Finalmente, es importante mencionar que el Consejo Noruego para Refugiados reconoce el compromiso del Gobierno Nacional con la Declaración de Escuelas Seguras y las acciones adelantadas para la implementación del plan de escuelas seguras; sin embargo, seguimos haciendo un llamado para que:

- El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación acuerden implementar las recomendaciones de la Declaración para mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los Derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente las áreas en las que faltan datos, a fin de mejorar la información para la toma de decisiones. En el caso de un ataque identificado, la información

---

<sup>4</sup> Ver: [La situación humanitaria en Colombia ha seguido deteriorándose en 2024](#)

debería incluir datos sobre el horario del ataque, si se produjo un robo o saqueo, reclutamiento, sustracción y/o abuso sexual. Los informes también deberían incluir una apreciación del daño físico a las estructuras educativas causadas por el ataque para poder orientar los recursos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura escolar y protección de estudiantes, docentes y personas que trabajan en las escuelas.

- Al ministerio de Defensa debería continuar fortaleciendo sus esfuerzos para que se cumplan con las medidas de prevención y protección de las escuelas, en especial las relacionadas con el uso y ocupación militar de las escuelas. Debe analizarse la posible correlación entre el uso y ocupación de las escuelas cuando están cerca de instalaciones de la fuerza pública. Este análisis debería incluir recomendaciones para prevenir posibles ataques contra la educación.
- A la Unidad para las Víctimas para que su análisis de riesgos siga contribuyendo con la priorización geográfica para la protección de las escuelas, pero también para que el registro de víctimas (a través del formulario único de declaración) permita identificar si los hechos victimizantes están o no relacionados con ataques a la educación.
- A la Unidad para las víctimas para que sigan atendiendo a las víctimas de ataques contra escuelas y se atiendan, a través de los mecanismos que el actual gobierno ha impulsado de búsqueda activa de las víctimas, los casos donde aún hay necesidades humanitarias para asistir a la población.
- Al Ministerio de Educación y Secretarías de Educación para que aseguren que las decisiones de volver a abrir establecimientos educativos o retomar las clases en áreas de riesgo se basen en evaluaciones de seguridad cada vez más rigurosas.
- Al Ministerio de Educación para que continúe desarrollando políticas, planes y programas que consideren la incidencia del conflicto armado, orientados a reducir el riesgo de conflictos futuros, garantizando el acceso a la educación en áreas rurales y fortaleciendo sus planes de estudio orientados a promover la paz.
- Al programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) para que de manera segura y con un enfoque de protección priorice las actividades que conducen a la eliminación de los peligros de artefactos explosivos, incluidos estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, documentación posterior a la limpieza de acción contra las minas y la entrega de tierras despejadas a las comunidades educativas afectadas por esta situación.
- A los actores humanitarios y en especial al Clúster de Educación y al Clúster de Protección en Colombia para que se acuerde e implemente un mecanismo conjunto de recolección de información y análisis de ataques contra la educación.
- Al cuerpo diplomático y los donantes humanitarios para que sigan apoyando e incidiendo ante las autoridades para la implementación del plan de acción nacional sobre escuelas seguras del gobierno colombiano.